



RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN

SALA SEXTA DE DECISIÓN LABORAL

Medellín, doce (12) de marzo de dos mil veintiuno (2021)

REFERENCIA: APELACIÓN AUTO QUE NEGÓ DECRETO DE PRUEBAS
DEMANDANTE: NOREDY ALCIRA ROJAS PANIAGUA
DEMANDADOS: COLPENSIONES Y MARÍA LUCIENY MUÑOZ
RADICADO: 050013105 015 2018 00187 01
Acta No: 16

La Sala Sexta de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Medellín, conformada por los Magistrados **ANA MARÍA ZAPATA PÉREZ, DIEGO FERNANDO SALAS RONDÓN y MARÍA PATRICIA YEPES GARCÍA** se constituyó en audiencia pública en el proceso de trámite ordinario laboral de primera instancia promovido por **NOREDY ALCIRA ROJAS PANIAGUA** en contra de **COLPENSIONES y MARÍA LUCIENY MUÑOZ** para decidir el recurso de apelación interpuesto por la apoderadas de **NOREDY ALCIRA ROJAS PANIAGUA y MARÍA LUCIENY MUÑOZ** contra el auto mediante el cual el Juzgado Quince Laboral del circuito de Medellín decidió no decretar pruebas.

La Magistrada del conocimiento, doctora Ana María Zapata Pérez, declaró abierta la audiencia. A continuación, la Sala previa deliberación sobre el asunto, como consta en el **acta 16** de discusión de proyectos, adoptó el presentado por la ponente, el cual quedó consignado en los siguientes términos:

1. ANTECEDENTES DEL AUTO RECURRIDO

1.1. LA DECISIÓN DE NO DECRETAR PRUEBAS

Con este proceso la señora NOREDY ALCIRA ROJAS PANIAGUA por intermedio de la abogada **CATALINA TORO GOMEZ**, pretende disputar el 50% de la pensión de sobrevivientes que le fue reconocida mediante **sentencia judicial** a la señora MARÍA LUCIENY MUÑOZ con ocasión del fallecimiento del señor LUIS EMILIO URIBE ARROYAVE, proceso tramitado en el

Juzgado 12 Laboral del Circuito de esta ciudad bajo el radicado 050013105012 2007 01315 00. Así, demanda el reconocimiento de la pensión desde el día del fallecimiento del causante, prestación que se debe acrecentar en el momento en que los hijos beneficiarios pierdan la calidad. Además, pretende el pago de intereses moratorios, indexación, costas y agencias en derecho. La demanda se sustenta en los siguientes **hechos relevantes para lo que es objeto de decisión**¹: **i)** El señor LUIS EMILIO URIBE ARROYAVE falleció el 27 de noviembre de 2002, inició una relación sentimental con la demandante en el año 1997, comenzaron convivencia como compañeros permanentes en el año 1998, más de cuatro años hasta la fecha del deceso, procrearon una hija JULIETH URIBE ROJAS, quien recibe mesada pensional en un 50%. **ii)** El causante antes de la convivencia con la actora, convivió con MARÍA LUCIENY MUÑOZ con quien procreó 4 hijos, convivencia que terminó desde el año 1997. La convivencia entre NOREDY ALCIRA y el causante se desarrolló en la misma casa en la que en su momento convivió con MARÍA LUCIENY, luego de que ésta abandonara el hogar, lugar en el cual murió de manera violenta. **iii)** Previo al inicio de la reclamación administrativa de la pensión de sobrevivientes, NOREDY ALCIRA recibió notificación del Juzgado 12 Laboral del Circuito de Medellín para que participara en el trámite como interviniente *ad excludendum*, **en nombre propio** y en representación de su hija, en el proceso que adelantó MARÍA LUCIENY MUÑOZ en contra de COLPENSIONES radicado bajo el número **050013105 012 2007 01315 00**. El profesional del derecho contratado no presentó en debida la forma la demanda reclamando la prestación para la compañera, porque se limitó a la representación de la menor. En sentencia del 27 de junio de 2014, el Juzgado 19 Laboral de Descongestión de Medellín decidió reconocer la pensión de sobrevivientes a MARÍA LUCIENY, **declarando que NOREDY ALCIRA no era beneficiaria de la pensión**, a pesar de que no fue parte en el parte; decisión que fue confirmada por el Tribunal Superior de Descongestión Laboral de Medellín en providencia del 30 de octubre de 2015. **iv)** En vista de lo anterior, la doctora **CATALINA TORO**, como nueva apoderada, solicitó nulidad procesal y en virtud de los recursos interpuestos, la Sala Primera de Decisión Laboral del Tribunal declaró. **a)** La nulidad en forma parcial de la sentencia de primera instancia, específicamente en la parte que hace referencia a las pretensiones de la señora NOREDY ALCIRA ROJAS PANIAGUA y al numeral OCTAVO de la parte resolutive, en el que se declaraba que ésta no ostentaba la calidad de compañera permanente. **b)** La nulidad en forma parcial de la sentencia de segunda instancia, en lo que respeta al derecho pensional

¹ Folio 1 a 12

y prueba de la convivencia de la señora ROJAS PANIAGUA. Afirma así, que no existe cosa juzgada y puede ejercer la acción judicial.

Entre las pruebas solicitadas, están las siguientes²:

“RATIFICACIÓN DE DOCUMENTOS: Solicito señora juez que las declaraciones de terceros que sean aportadas por los demandados COLPENSIONES y por MARÍA LUCIENY MUÑOZ se requiera su ratificación en audiencia, conforme lo señala el artículo 262 del Código General del Proceso, incluso aquellas rendidas en el proceso ordinario adelantado por la demandada MUÑOZ”.

“EXHORTO: Ruego señora juez que se libre exhorto de prueba dirigido a la Fiscalía General de la Nación, para que remita a este proceso todo el material probatorio recaudado en razón del homicidio del señor LUIS EMILIO URIBE ARROYAVE quien se identificaba con cédula de ciudadanía número 70.092.233”.

Notificadas las demandadas COLPENSIONES y MARÍA LUCIENY MUÑOZ dieron respuesta a la misma oponiéndose a las pretensiones³. MARÍA LUCIENY MUÑOZ, a través de curadora *ad litem*, solicitó que se decrete PRUEBA TRASLADADA en los siguientes términos:

“De manera respetuosa solicito a la señora juez y de conformidad con el artículo 174 del Código General del Proceso, se sirva disponer el traslado del material probatorio y todo lo concerniente al proceso que se llevó a cabo en el juzgado 12 Laboral del Circuito bajo el radicado 0500131050122007 – 1315 – 00 respecto de la pensión de sobrevivientes que solicitara la señora MARÍA LUCIENY MUÑOZ por el fallecimiento de su compañero permanente el señor LUIS EMILIO URIBE ARROYAVE y en donde salieron adelante las pretensiones a mi representada”.

En la audiencia celebrada el **29 de enero de 2020⁴**, estando en la etapa procesal pertinente, la Juez denegó el decreto de las pruebas previamente referidas, solicitadas por la demandante y por la curadora *ad litem* de MARÍA LUCIENY MUÑOZ.

1.2. LOS RECURSOS DE APELACION

1.2.1. LOS ARGUMENTOS DE LA DEMANDANTE NOREDY ALCIRA ROJAS PANIAGUA

La apoderada argumenta en la procedencia del decreto de las dos pruebas, así: **i)** En relación con la **RATIFICACIÓN DE DOCUMENTOS**, invoca el **artículo 262 del CGP**, agrega que, no solo se refiere a las pruebas recibidas en el otro proceso ordinario laboral, sino a aquellas declaraciones rendidas sin comparecencia de la parte demandante ante el ISS, que fueron allegadas en el expediente administrativo de COLPENSIONES; señalando que, para que tengan valor probatorio, se debe decretar su ratificación o de lo contrario no se les da valor probatorio a aquellas declaraciones rendidas en el trámite administrativo. **ii)** Y

² Folio 10

³ Folio 166 a 173 y 244 a 247, respectivamente

⁴ Folio 256 – 257, CD folio 255

respecto al **EXHORTO a la Fiscalía**, expresa que se trata de documentos que no pueden ser obtenidos por la parte en virtud de la reserva legal consagrada en el artículo 212 B del Código de Procedimiento Penal. Añade que se trata de una prueba es relevante, porque tal como se anuncia en la demanda, el homicidio del señor LUIS EMILIO URIBE ocurrió en la vivienda en la que vivía con la señora **ROJAS PANIAGUA** en presencia de ella y esos hechos tomados por la Fiscalía en el levantamiento del cadáver y en las indagaciones preliminares del homicidio, quedaron bajo reserva. Con esos documentos se prueba precisamente, que ese día en el que falleció vivía con la demandante en esa casa, estaba con ella compartiendo en su domicilio su vida familiar, situación muy importante para probar la última convivencia cuando se trata de la disputa de dos compañeras permanentes.

1.2.2. EL RECURSO DE LA CURADORA AD LITEM DE MARÍA LUCIENY MUÑOZ.

La apoderada insiste en que se decrete como **PRUEBA TRASLADADA** el proceso que se tramitó en el Juzgado 12 Laboral del Circuito en el radicado 2007 – 01315, resaltando su importancia porque en ese proceso discutió acerca de quien era la persona que convivía con el causante durante todos esos años.

1.3. La Juez de instancia no repuso las decisiones adoptadas remitiéndose a los argumentos esbozados para negar el decreto de pruebas, concediendo así los recursos de apelación.

1.4. EL TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA.

Habiéndose corrido traslado para formular alegatos de conclusión en esta instancia⁵, intervinieron las siguientes partes.

La curadora **ad litem** de **MARÍA LUCIENY MUÑOZ reitera que** la prueba solicitada es conducente, porque en el proceso tramitado en el Juzgado Doce Laboral del Circuito de Medellín se logró probar que la señora MUÑOZ fue la compañera permanente de LUIS EMILIO URIBE ARROYAVE, por lo que se le declaró beneficiaria de la pensión de sobrevivientes, condenándose a COLPENSIONES al reconocimiento y pago de la pensión en forma retroactiva.

COLPENSIONES a su turno, solicite se confirme la decisión de negar la prueba trasladada, invocando el **artículo 174 del C.G.P.**, señalando que no se cumplen los requisitos establecidos por la norma para hacerla valer esa prueba en este proceso, porque no fue solicitada adecuadamente, y en consecuencia, no es posible por el operador jurídico valorar la conducencia, pertinencia y utilidad de la prueba.

⁵ Artículo 15 Decreto 806 de 2020

2. CONSIDERACIONES DE LA SALA

De acuerdo con los ANTECEDENTES de esta providencia, el **problema jurídico** a resolver por la Sala, se contrae en determinar, si en este caso resulta procedente acceder al decreto de las pruebas que fueron solicitadas en la demanda y en la contestación presentada por la curadora *ad litem* de la señora MARÍA LUCIENY MUÑOZ.

Para efectuar el análisis en esta instancia, debe abordarse en primer lugar el principio de la NECESIDAD DE LA PRUEBA, según el cual ésta es de vital importancia para la demostración de los hechos del proceso, sin ella las decisiones judiciales estarían revestidas de arbitrariedad e ilegalidad, y es por ello que a los Jueces de la República les está prohibido basar sus providencias en su propia experiencia o en su sentido común, debiendo soportar sus decisiones en las pruebas recaudadas oportuna y legalmente.

Y se predica la necesidad de prueba y no la libertad, porque al funcionario judicial no le está permitido legalmente desatar las controversias puestas a su consideración con base en circunstancias que no obren o no existan dentro del proceso. Ésta necesidad tiene sustento, además, en el derecho de contradicción, el cual se menoscabaría en el evento en que las decisiones judiciales se fundamentaran en pruebas inexistentes o aportadas ilegalmente, o en ideaciones o en conocimientos privados del juez.

Adicional a lo anterior, en el derecho probatorio se encuentra **el derecho de las partes a la prueba**, el que nace como fundamento del debido proceso constitucional consagrado en el **Art. 29 Superior**, y el que se materializa en el derecho a solicitar pruebas, a que el Juzgador las decrete, a que se practiquen las decretadas y controvertirlas, y finalmente, a que las pruebas oportuna y legalmente aportadas al proceso sean valoradas. Y el Código General del Proceso en el **capítulo I** del título único, **artículo 164**, dispone que todas las decisiones judiciales deben fundarse en las pruebas regulares y oportunamente allegadas al proceso.

En relación al tema, la Corte Constitucional a través de Sentencia T-074 de 2018, ha dispuesto que *“Por regla general, **la carga de la prueba le corresponde a las partes**, quienes deben acreditar los hechos que invocan a su favor y que sirven de base para sus pretensiones. Este deber, conocido bajo el aforismo “onus probandi”, exige la realización de ciertas actuaciones procesales en interés propio, como la demostración de la ocurrencia de un hecho o el suministro de los medios de pruebas que respalden suficientemente la hipótesis jurídica defendida. **De ahí que, de no realizarse tales actuaciones, según la jurisprudencia reiterada de esta Corporación, el***

resultado evidente sea la denegación de las pretensiones, la preclusión de las oportunidades y la pérdida de los derechos.”, Sentencia C-086 de 2016. (Negrillas fuera del texto original)

Finalmente, debe tenerse presente que el Juez Laboral, en su calidad de director del proceso, resuelve sobre la **admisión y recepción** de la prueba, sobre su **conducencia, pertinencia** y sobre su práctica, en los términos del **artículo 53** del **CPL**, debiendo tener como norte para tal determinación, que las pruebas son un elemento que sirve a la materialización del derecho de acción como de la defensa, expresiones del debido proceso en los términos ya analizados.

A partir de las consideraciones precedentes se efectuará el análisis respecto de cada una de las pruebas que fue denegada por la Juez de instancia, partiendo de unas premisas básicas: i) A la señora MARÍA LUCIENY MUÑOZ le fue concedida la pensión de sobrevivientes en calidad de compañera permanente del señor LUIS EMILIO URIBE ARROYAVE quien falleció el 27 de noviembre de 2002, en virtud de un proceso que se tramitó en contra de COLPENSIONES con el radicado número **050013105 012 2007 01315 00**. En la sentencia proferida en primera instancia se declaró que NOREDY ALCIRA no era beneficiaria de la pensión, lo que fue confirmado por el Tribunal Superior de Descongestión Laboral de Medellín en providencia del 30 de octubre de 2015. ii) Estas decisiones fueron controvertidas por la apoderada actual de la señora ROJAS PANIAGUA⁶, lo que generó que la **Sala Primera de Decisión Laboral de este Tribunal** con providencia del **23 de enero de 2018**⁷ declarara la nulidad constitucional por vía de hecho en forma parcial, de las sentencias de primera y segunda instancia, en relación con el derecho de quien hoy demanda en éste proceso el reconocimiento pensional en su favor. iii) En esa providencia se concluyó que la señora NOREDY ALCIRA no hizo parte **en nombre propio**, por activa, por pasiva ni como Litis consorte en ese proceso, no presentó pretensiones ni hechos, no se le decretaron pruebas con las que pudiera demostrar o no su derecho pensional. iv) En razón de lo anterior, el orden lógico para resolver los recursos será en primer lugar con el de la demandada, MARÍA LUCIENY MUÑOZ, que pretende el traslado de la prueba practicada en el anterior proceso, lo que guarda estrecha relación directa con la solicitud de la parte demandante, que va dirigida entre otros, a la ratificación de las **pruebas recibidas en el otro proceso ordinario laboral**, así como a las declaraciones rendidas sin comparecencia de la demandante ante el ISS y que fueron allegadas en el expediente administrativo de COLPENSIONES

⁶ Folios 107 - 118

⁷ Folio 119 - 125

2.1. LA PRUEBA PRACTICADA EN EL PROCESO CON RADICADO 0500131050122007 – 1315 – 00 y las DECLARACIONES RENDIDAS ANTE EL I.S.S. EN EL TRÁMITE ADMINISTRATIVO.

La curadora *ad litem* de MARÍA LUCIENY MUÑOZ en la contestación invocó el **artículo 174** del Código General del Proceso, para solicitar disponer el **traslado del material probatorio y todo lo concerniente** al proceso que se llevó a cabo en el Juzgado 12 Laboral del Circuito bajo el radicado 0500131050122007 – 1315 – 00. Para denegar esta petición, la Juez de instancia argumentó, que las pruebas que se pretenden trasladar debieron practicarse en el otro Juzgado a petición de la parte demandante o con audiencia de ella, lo que no se cumple en el caso concreto. Pero en el recurso se insiste en la importancia de lo solicitado, porque en el otro proceso se discutió acerca de quién fue la persona que convivió con el causante.

De otro lado, la apoderada de la demandante en este proceso, solicitó que respecto de las declaraciones de terceros que fueran aportadas por COLPENSIONES y por MARÍA LUCIENY MUÑOZ, se requiera su **ratificación en audiencia**, incluyendo aquellas rendidas en el proceso ordinario adelantado en el Juzgado 12 Laboral del Circuito. Para denegar el decreto de esta prueba, la Juez de instancia argumentó que esta ratificación procede frente a documentos privados de contenido declarativo, lo cual es diferente en tratándose de **declaraciones rendidas en audiencia**. Pero la recurrente insiste en el decreto de la prueba, señalando que, no solo se refiere a las **pruebas recibidas en el otro proceso ordinario laboral**, sino a aquellas **declaraciones rendidas sin comparecencia de la parte demandante ante el ISS, que fueron allegadas en el expediente administrativo de COLPENSIONES**; insistiendo en que, para que tengan valor probatorio, se debe decretar su ratificación o de lo contrario no se les debe dar valor probatorio a esas declaraciones rendidas en el trámite administrativo.

Sobre la prueba trasladada, el **artículo 174** del **C.G. del P** dispone lo siguiente:

“Las pruebas practicadas válidamente en un proceso podrán trasladarse a otro en copia y serán apreciadas sin más formalidades, siempre que en el proceso de origen se hubieren practicado a petición de la parte contra quien se aducen o con audiencia de ella. **En caso contrario, deberá surtir la contradicción en el proceso al que están destinadas. La misma regla se aplicará a las pruebas extraprocesales.**

La valoración de las pruebas trasladadas o extraprocesales y la definición de sus consecuencias jurídicas corresponderán al juez ante quien se aduzcan”. (Negrillas fuera de texto)

Y en relación con la ratificación de testimonios recibidos fuera del proceso, el **artículo 222 del estatuto procesal**, consagra lo siguiente:

“Solo podrán ratificarse en un proceso las **declaraciones de testigos cuando se hayan rendido en otro** o en forma **anticipada sin citación o intervención de la persona contra quien se aduzcan, siempre que esta lo solicite**.

Para la ratificación se repetirá el interrogatorio en la forma establecida para la recepción del testimonio en el mismo proceso, sin permitir que el testigo lea su declaración anterior”.

El análisis sistemático de estas disposiciones, permite concluir en este caso concreto, lo siguiente:

En primer lugar, que habiéndose tramitado un proceso anterior, en el que se practicó una prueba dirigida a verificar la calidad de beneficiaria de la señora MARÍA LUCIENY MUÑOZ, y que de hecho sirvió para otorgar la prestación que hoy NOREDY ALCIRA reclama para sí invocando la calidad de compañera permanente del causante al momento de su muerte; resulta no solo pertinente, conducente sino también necesario, trasladar esa prueba a este proceso, en el que se va a resolver si la hoy demandante es o no la beneficiaria de la pensión, de acuerdo con lo previsto en nuestro ordenamiento jurídico, concretamente, del **artículo 47 de la Ley 100 de 1993**, norma vigente al momento de fallecimiento del causante, hecho ocurrido el **27 de noviembre de 2002**.

Pero, como se trata de una prueba practicada en un proceso en el que NOREDY ROJAS PANIAGUA no fue parte, se encuentra claramente legitimada para solicitar su ratificación en este proceso, de acuerdo con lo establecido en el **artículo 222**, norma en la que además se establecen las reglas para repetir el interrogatorio. De esta manera se garantiza, además, el derecho de contradicción de esa prueba ya practicada sin su comparecencia, como bien lo expresa el **artículo 174**, que además dispone, que será a la Juez del actual proceso a quien le corresponde efectuar su valoración.

Lo mismo sucede en relación con la petición que efectúa la apoderada de la DEMANDANTE respecto de las **pruebas practicadas en el trámite administrativo ante el I.S.S.** y que, de hecho, sirvieron de base a la entidad para negar el reconocimiento de la pensión a su favor, lo que se observa con claridad en la Resolución GNR 93331 del 26 de marzo de 2015, en la que se hace referencia entre otros a las declaraciones efectuadas por MARÍA LUCIENY MUÑOZ y MARTHA LUCÍA RUA⁸. En efecto, el **artículo 222 del estatuto procesal**, dispone el derecho de MARÍA LUCIENY MUÑOZ a solicitar la ratificación de esas declaraciones de testigos rendidas sin su intervención.

⁸ Folios 49 - 53

Todo esto sin duda se acompasa con lo previsto en los **artículos 60 y 61 del Código Procesal del Trabajo**, en aras de hallar la verdad real y el esclarecimiento de los hechos controvertidos acorde con la legalidad, la justicia, presupuestos axiológicos que son menester, en aras de atender el impostergable deber de dar, íntegra y cabal preeminencia al derecho sustancial.

2.2. EXHORTO A LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN

En la demanda se solicita como prueba, que se **EXHORTE** a la Fiscalía General de la Nación, para que remita a este proceso todo el material probatorio recaudado en razón del homicidio del señor LUIS EMILIO URIBE ARROYAVE quien se identificaba con cédula de ciudadanía número 70.092.233. La Juez de instancia no accede al decreto de esta prueba, por considerarla irrelevante para resolver de fondo el asunto sometido a estudio.

Pero la apoderada en el recurso argumenta que la prueba sí es relevante, porque tal como se anunció en la demanda, el homicidio del señor LUIS EMILIO URIBE ocurrió en la vivienda en la que vivía con la señora ROJAS PANIAGUA. Alega que el hecho ocurrió en presencia de ella, hechos que fueron tomados por la Fiscalía en el levantamiento del cadáver y en las indagaciones preliminares del homicidio; insistiendo en que con la prueba se demuestra que el día en el que falleció vivía con la demandante en esa casa, estaba con ella compartiendo en su domicilio su vida familiar, lo que es importante para probar la última convivencia cuando se trata de la disputa de dos compañeras permanentes.

En efecto, se advierte en el Registro de Defunción que el causante falleció el 27 de noviembre de 2002 a las 2:45 pm, la causa del deceso fue violenta de acuerdo con el oficio 19610 y acta 4129 del Fiscal 149 Seccional⁹.

Pues bien, en criterio de la Sala la prueba resulta pertinente, porque según se afirma en la demanda, la muerte violenta ocurrió en el lugar de residencia del señor URIBE ARROYAVE, en el que primero vivió con la señora NOREDY ALCIRA y luego con MARÍA LUCIENY lo que se pretende acreditar. Por ello la información que se obtenga de la investigación que se adelanta ante la Fiscalía General de la Nación sobre las circunstancias de tiempo, modo y lugar del fallecimiento del señor URIBE ARROYAVE, puede resultar relevante para esclarecer la convivencia al momento de la muerte, máxime en un caso como el presente en el que ya se profirió condena en proceso anterior, a favor de quien en su momento afirmó y probó ostentar la calidad de compañera permanente.

⁹ Folio 22- 23

Es el conjunto de CONSIDERACIONES precedente, el que impone REVOCAR la decisión de primera instancia. Y al salir adelante los recursos de apelación, no habrá condena en costas en esta instancia.

4. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Sexta de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

DECIDE:

PRIMERO: REVOCAR la decisión de primera instancia proferida el veintinueve (29) de enero de dos mil veinte (2020), para en su lugar, ordenar el decreto de las siguientes pruebas, de acuerdo con las consideraciones de la parte motiva de esta providencia:

- Solicitada por la **DEMANDADA** MARÍA LUCIENY MUÑOZ, el traslado del material probatorio del proceso que se llevó a cabo en el Juzgado 12 Laboral del Circuito bajo el radicado 0500131050122007 – 1315 – 00
- Solicitada por la **DEMANDANTE** NOREDY ALCIRA ROJAS PANIAGUA: i) La ratificación en audiencia de los **testimonios rendidas en el proceso ordinario adelantado en el Juzgado 12 Laboral del Circuito** (radicado 0500131050122007 – 1315 – 00), así como de las **declaraciones rendidas en el trámite administrativo realizado ante la administradora de pensiones**. ii) El EXHORTO dirigido a la Fiscalía General de la Nación, para que remita a este proceso el material probatorio recaudado en razón del homicidio del señor LUIS EMILIO URIBE ARROYAVE quien se identificaba con cédula de ciudadanía número 70.092.233".

SEGUNDO: Sin costas en esta instancia.

Lo anterior se notifica por ESTADOS. Se da por terminada la audiencia y se firma en constancia por los que en ella intervinieron.

RADICADO 050013105 015 2018 00187 01

Los Magistrados,



ANA MARÍA ZAPATA PÉREZ



DIEGO FERNANDO SALAS RONDÓN



MARÍA PATRICIA YEPES GARCÍA

**EL SUSCRITO SECRETARIO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE
MEDELLÍN – SALA LABORAL - HACE CONSTAR**

Que la presente providencia se notificó por estados N ° 45
del 15 de marzo de 2021

consultable aquí:

<https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-medellin-sala-laboral/125>

RADICADO 050013105 015 2018 00187 01



RADICADO: 050013105 015 2018 00187 01
AUTO del 12/03/2021

Con este código puede acceder a la actuación de segunda instancia, **para ello debe tener una cuenta de Microsoft.**